



Voces del Sur

Órgano de Formación, Capacitación y Divulgación del Partido de la Revolución Democrática de Guerrero

Edición No. 27 - Chilpancingo, Gro., Julio-Septiembre de 2022

Prosigue el PRD-Gro la reestructuración de sus dirigencias municipales



Caso Ayotzinapa
Cada vez más
enredado

Prosigue el PRD-Gro la reestructuración de sus dirigencias municipales

**Entre agosto y septiembre, se renovaron los comités municipales de Atoyac de Álvarez, San Jerónimo y Coyuca de Benítez.*

Como parte del proceso de reestructuración de sus dirigencias municipales, con rumbo a las elecciones locales y federales del año 2024, el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero renovó sus direcciones ejecutivas municipales de Atoyac de Álvarez, San Jerónimo y Coyuca de Benítez, municipios de la Costa Grande.

El 28 de agosto, la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, encabezada por su presidente, Alberto Catalán Bastida, supervisó la integración de la nueva Dirección Ejecutiva Municipal (DEM) en Atoyac y San Jerónimo.

La jornada empezó en Atoyac, donde rindieron protesta Antonio Gutiérrez Martínez, como presidente de la DEM; Jesusita Galeana Radilla, como secretaria general, y Diana Gisela Jaimes Iturio, como secretaria de Formación Política.

En San Jerónimo, la nueva dirigencia municipal quedó integrada por Martha Patricia Galeana Robles, en la Presidencia de la DEM; Sergio de la Cruz de la Rosa, en la Secretaría General; Ángel Leyva Cegueda, en la Secretaría de Asuntos Electorales y Política de Alianzas; Diana Iris Fierro García, en la Secretaría de Planeación Estratégica y Organización Interna, y Cielmar Montor Serna, en la Secretaría de Igualdad de Géneros y Comunicación Política.

En Coyuca de Benítez, donde la nueva diri-

gencia rindió protesta el 10 de septiembre, Alberto de los Santos Díaz fue designado en la Presidencia de la DEM; Rubilein Barrera Plácido, en la Secretaría General; Kristal Paola Tumalan Fajardo, en la Secretaría de Finanzas; Héctor Eduardo Salazar Mendoza, en la Secretaría de Finanzas, y Paulo Moreno Radilla, en la Secretaría de Asuntos Electorales.

Posterior a estas tres renovaciones, se va a continuar con los demás municipios de la Costa Grande donde sea necesario, para concluir con esa microregión integrada por Zihuatanejo, Coahuayutla y Petatlán. En La Unión, donde gobierna el PRD, ya está integrada la dirigencia municipal.

Y en noviembre se continuará con la Región Montaña.

Es importante la renovación de las dirigencias municipales del PRD, porque son la columna vertebral del partido, quienes en el territorio diseñan las estrategias en los procesos electorales; son los que tienen contacto directo con la militancia y es fundamental que el partido tenga direcciones ejecutivas municipales como columna vertebral para poder ser competitivos.

En ese sentido, las direcciones ejecutivas municipales de Atoyac y San Jerónimo se integraron con dirigentes y personas altamente califica-

das y con experiencia, lo mismo que en Coyuca de Benítez, con Alberto de los Santos, que ya fue alcalde en dos ocasiones y tiene una experiencia muy importante.

El proceso de renovación de las dirigencias municipales tiene la finalidad de aceitar la estructura, porque si hay estructura, si hay dirección, si hay una militancia considerable, un voto duro consolidado, se aseguran buenos resultados en las elecciones.

La dirigencia estatal considera importantes estas giras de trabajo que se han llevado a cabo tanto en Costa Chica como en Costa Grande, en las que por cierto, ha habido una participación significativa, aunque no deja de reconocer últimamente el PRD se ha ausentado, se ha olvidado de la lucha social y de algunos otros ejes de lucha y de trabajo que caracterizaron al partido en sus inicios.

Por ello, en esta etapa, se está trabajando el asunto de la estructura, que es fundamental.

Para el proceso de reestructuración, se están revisando los 81 municipios, a fin de todas las direcciones municipales estén integradas al cien por ciento. Porque en algunos casos hubo integrantes que renunciaron o bien que en algunas dirigencias no están representadas todas las expresiones políticas del partido. Y la finalidad

DIRECTORIO

**DIRECCIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE
GUERRERO**

Alberto Catalán Bastida
PRESIDENTE

Ivet Díaz Bahena
SECRETARÍA GENERAL

MOISÉS ACEVEDO RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS
ELECTORALES Y POLÍTICA DE ALIANZAS

Eleazar Sierra Oropeza
SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS LEGISLATIVOS

Jesús Guatemala Aguilar
SECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
ORGANIZACIÓN INTERNA

Félix Moreno Peralta
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

MIRNA GUADALUPE CORIA MEDINA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE AGENDAS DE
IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL,
DERECHOS HUMANOS, DE LAS JUVENTUDES,
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Bernardo Ortega Jiménez
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN DEL PRD

Fernando Sandoval Palacios
SECRETARIO TÉCNICO

MESA DEL CONSEJO

Mario Ruiz Valencia
PRESIDENTE

Marco Antonio Orgániz Ramírez
VICEPRESIDENTE

Erika Isabel Guillén Román
SECRETARÍA

Voces del Sur (año 7, número 27) es una publicación trimestral, editada y distribuida por el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, Av. Miguel Alemán, No. 80, Col Centro, Chilpancingo, Gro. C. P. 39060.

Editor responsable: Félix Moreno Peralta.

Impreso por: Ulises Domínguez Mariano, Nogal No. 56, Fracc. Jacarandas II, Chilpancingo, Gro., C. P. 39097.

Este número se imprimió el 30 de Septiembre de 2022, con un tiraje de 1000 ejemplares.



Renovación de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD en Atoyac de Álvarez.



es que las direcciones ejecutivas sean plurales.

Y dependiendo del caso y de la temporalidad, la gente decide si se cambia todo o si se mantiene a los dirigentes. Por lo tanto, se está revisando e integrando en donde sea necesario. Si falta el presidente, se tiene que cambiar al presidente. Si falta algún secretario se integran los compañeros que no están representados en su expresión política.

La renovación en cada uno de los municipios en donde se requiera, la preside la dirección estatal. Se emite una convocatoria ocho días antes y se convoca a la militancia y en presencia de la militancia se hace la toma protesta de ley a los nuevos dirigentes o se ratifican a los compañeros que han hecho buen trabajo.

Acude el pleno de la dirección estatal del partido y se plantean los ejes de trabajo que tienen que desarrollar en su periodo de gestión política al frente del partido y que tiene que ver con el asunto de la gestión social, la coordinación con los ayuntamientos, la atención a la militancia, etcétera, y son algunas de las cosas y que ellos,



Toma de protesta de la nueva Dirigencia Municipal perredista en San Jerónimo.

de acuerdo con su municipio, tienen sus propios requerimientos, sus propias necesidades. Y así, cada dirigencia municipales es la que, de alguna manera, gestiona y hace los trabajos para consolidar a la militancia.

Cabe señalar que las direcciones municipales que se están integrando en este proceso, estarán en el cargo hasta después del 2024. Después de dos años se harán las valoraciones y se definirá en dónde es necesario hacer renovaciones o algunos cambios estatutarios.

O también, si el congreso nacional que posiblemente se haga en septiembre, posiblemente este año o el año que viene y es un mandato del Congreso la renovación de todas las estructuras, entonces se saca la convocatoria, mientras, deben cumplir el periodo de dos años mínimamente.

En Coyoaca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz fue designado como nuevo presidente de la Dirección Ejecutiva Municipal, ante unos 250 militantes de las diferentes colonias de Coyoaca, barrios y de los pueblos más importantes de ese





La nueva Dirección Ejecutiva Municipal del PRD en Coyuca de Benítez rinde protesta.

municipio, que se dieron cita para tal efecto en la sede del partido.

Además de concurrida, esta reunión fue bastante productiva, ya que la gente estuvo muy participativa y manifestó sus inquietudes a la dirigencia estatal.

Se tiene confianza en que la gestión de Alberto de los Santos va a ser exitosa en corto tiempo, debido a que él goza de una base social amplia.

En el caso de Atoyac, se renovaron a todos los integrantes de la dirección municipal, lo mismo que en San Jerónimo.

Vale la pena subrayar que tanto en Coyuca como en Atoyac, en los que el PRD no es gobierno, no se tuvo la intención de hacer una reunión con toda la base. Solo asistieron dirigentes de los pueblos más importantes y representaciones de los barrios, de las colonias.

En San Jerónimo, donde se convocó a menos militantes, estuvo el exdiputado federal y local Ricardo Barrientos Ríos, integrante de la dirigencia nacional, quien también ya fue dirigente estatal del partido.



Imparten el PRD-Gro y la UNAM el diplomado “Procesos democráticos y campañas políticas”

**La intención es seguir produciendo cuadros políticos para que no se haga una política improvisada y se tengan buenos resultados para el diseño de los nuevos procesos electorales, principalmente en Guerrero...*

Redacción Voces del Sur

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, a través de la Secretaría de Comunicación Política, estableció un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para llevar a cabo el diplomado “Procesos democráticos y campañas políticas”.

El diplomado está diseñado para desarrollarse en cuatro módulos de treinta horas cada uno, entre el 19 de agosto y el 12 de noviembre. Inicialmente, se pensó para cien participantes, pero ante la demanda que tuvo, se incrementó a ciento quince.

Las inscripciones se llevaron a cabo directamente en la plataforma digital del curso, donde también están disponibles la bibliografía y otros materiales.

El acto inaugural se llevó a cabo el 19 de agosto en el hotel Holiday Inn, de Chilpancingo, y allí se están llevando clases de manera mixta, tanto virtuales como presenciales. Las presenciales son los fines de semana, al inicio de cada módulo.

Se cuenta con un claustro de ponentes para

coordinar los siguientes temas: 1. Democracia, gobierno y sistema político. 2. Publicidad política y manejo de medios de comunicación. 3. Comunicación política y campañas políticas. 4. Introducción a las tecnologías de la información.

Con este diplomado se pretende dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas para comprender los procesos democráticos y el funcionamiento de las campañas electorales, diseñando estrategias electorales con publicidad pública y con contenidos digitales a la altura de las circunstancias del escenario actual.

Eso es lo que se está planteando, y el claustro de profesores que la UNAM plantea son la doctora Ana Laura Montiel Alvarez, el maestro Luis Angel Hurtado, el doctor José Luis Estrada y el maestro Sergio Enzaldo Baeza.

Para ingresar al diplomado y obtener la constancia respectiva se solicitó credencial de elector, escolaridad mínima de licenciatura, *currículum*, carta compromiso y cumplir por lo menos con 80% de asistencia, así como número de teléfono celular y correo electrónico.

La intención es seguir produciendo cuadros políticos para que no se haga una política improvisada y se tengan buenos resultados para el diseño de los nuevos procesos electorales, principalmente en Guerrero, de parte del Partido de la Revolución Democrática.

A la inauguración, asistieron, de parte de la UNAM, Ana Laura Montiel y Luis Angel Hurtado Razo; también estuvo el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, así como todos los inscritos.

Cabe resaltar que no se trató de un acto político, sino de un acto académico, que se espera arroje buenos resultados.

Durante el acto inaugural, Alberto Catalán destacó que hoy ya no se puede improvisar en política, que los procesos electorales para construir la democracia en México y específicamente en Guerrero, requieren de una mayor preparación, de una mayor formación tanto política como ideológica, a efecto de hacer políticas de gran calado para el desarrollo económico, político y social de nuestro estado.

El dirigente estatal presidente formuló es-

tos planteamientos para que se dote a los militantes del PRD para que se tengan elementos teóricos.

Asistieron participantes de las siete regiones de la entidad, ya que se pretende sembrar esta semilla en las diferentes regiones del es-

tado, a efecto de que tengan resultados en la cuestión práctica.

El diplomado está dirigido principalmente a militantes del PRD, para los simpatizantes, pero hay participantes que no tienen partido o, incluso, de otros partidos.

Al señalar que lo anterior no representa ningún conflicto, el secretario de Comunicación Política del PRD estatal, Félix Moreno Peralta, destacó que lo que más se valora es que el diplomado haya despertado el interés de la militancia y de la ciudadanía, ya que





se superó la meta de cien participantes en un 15%; es decir, 115 participantes en total.

“Creo que hay interés por la formación

política-ideológica que se ha perdido tanto en todos los partidos ante la debacle y la crisis y cuestionamiento social que ha habido para

todos los partidos políticos en general” reconoció el exdirigente magisterial.

En entrevista para Voces del Sur, Moreno Peralta aclaró que el diplomado no tiene ningún costo para los participantes, ya que se financia con la partida presupuestal que se dan al partido para actividades específicas de capacitación política.

“Es totalmente gratuita y se les entregó una carpeta con algunos materiales y la bibliografía”, agregó.

—De esos 115 participantes, ¿qué porcentaje son dirigentes estatales o municipales?

—La mayor parte son hombres y mujeres jóvenes... estamos planteando una renovación generacional; hay algunas gentes de experiencia, pero la mayor parte de los que tienen interés en la formación política son jóvenes.

Como información adicional, en febrero pasado la Cámara de Diputados dio otro paso; reformó la ley electoral, estableciendo que para la “capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, entre el 3% y el 10% del financiamiento público ordinario”



Ayotzinapa: cada vez más enredado

**...hay molestia de los deudos y los estudiantes en activo porque descubrieron (...) que cuando López Obrador se acercó a ellos para comprometerse a resolver la desaparición de los 43 normalistas fue con la intención de ganar la simpatía de los participantes en ese movimiento y atraerlos a las urnas.*

Rafael Solano

Un mes antes del octavo aniversario de la masacre de normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio por cerrado el caso con el informe que presentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, en donde la conclusión es que los 43 jóvenes reclamados como desaparecidos están muertos; sin embargo, en campaña y tras ganar la contienda, el presidente de la República hizo el compromiso de encontrarlos, de indagar qué pasó y habría castigo para los responsables.

Familiares de los normalistas tomaron con reserva dicha conclusión (que según Encinas Rodríguez es preliminar) y pidieron a los integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia continuar con las investigaciones en torno a los 43 alumnos desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, tras varios días de incertidumbre, iniciaron una jornada de movilizaciones que concluiría el día del octavo aniversario de los hechos sangrientos

con un mitin en la capital del país, en donde aseguraron que es una burla la investigación realizada por el gobierno lopezobradorista,

porque es muy parecida a la hecha en 2014 por el anterior gobierno peñista.

Aun más: hay molestia de los deudos y los



estudiantes en activo porque descubrieron, así lo expresaron en la pausa de una marcha en Chilpancingo, que cuando López Obrador se acercó a ellos para comprometerse a resolver la desaparición de los 43 normalistas fue con la intención de ganar la simpatía de los participantes en ese movimiento y atraerlos a las urnas.

Con la conclusión preliminar dada a conocer un mes antes del 26 de septiembre, también se quiso dar el mensaje a la ciudadanía de que este gobierno federal cumple sus compromisos, así haya tardado cuatro años; sin embargo, llegó el aniversario octavo de la masacre y la aprehensión de más de un centenar de implicados señalados en dicha conclusión no se dio; al contrario, hubo



el desistimiento de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) de 21 de esas órdenes de apre-

hensión que serían ejecutadas en contra de militares. Versiones distintas coinciden en que el Ejército presionó para que no enjui-



ciar a sus elementos involucrados.

Los presuntos culpables procesados son pocos. Un coronel de nombre José Rodríguez, excomandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, fue señalado de ordenar la muerte de seis de los 43 normalistas y está detenido; sin embargo, de recibir condena, sería por otro delito. En tanto, el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam está en prisión preventiva, pero ya libró en juzgados varias de las imputaciones. Previo al octavo aniversario, aprehendieron a otros tres militares.

El gobierno federal, ante la presión de los normalistas y grupos sociales afines, ante la falta de presuntos culpables en prisión, va por el juez de distrito de Procesos Penales Federales (con sede en Matamoros, Tamaulipas) Samuel Ventura, porque ha liberado a 120 implicados. Lo demandan tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por los probables delitos contra la administración de justicia y lo

que resulte. En la tercera semana de septiembre ordenó la liberación de 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio de un normalista que quedó en estado vegetativo. El 14 de septiembre, el mismo juez dispuso la absolución del exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Con esas liberaciones, van 120 implicados liberados por ese juez. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldivar, defendió a su colega diciendo que cuando no se integraban bien los expedientes judiciales; es decir, por fallas en el procedimiento, se puede disponer la liberación del inculcado.

En fin, el caso Ayotzinapa se enredó más. El gobierno de López Obrador quedó atrapado en un asunto en donde quiso demostrar tanto la eficacia propia como la culpabilidad ajena. Y prácticamente ya acabó el sexenio, porque la sucesión presidencial se adelantó con el abierto proselitismo que ya realizan varios de los prospectos a tomar la estafeta.

Conclusiones semejantes

La entonces Procuraduría General de la República llegó en noviembre de 2014 a similar resultado que el presentado por Encinas Rodríguez: los normalistas fueron ultimados por maleantes que creyeron que se trataba de una pandilla rival que iba a despojarlos de un cargamento de enervantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de los familiares de los normalistas tampoco difirió de la investigación oficial; lo único que agregó el GIEI, en septiembre de 2016, es que la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula despertaba dudas, por lo que recomendó a las autoridades correspondientes proseguir la búsqueda de los 43 normalistas que incursionaron en Iguala.

A casi cuatro años de nuevas indagaciones, la Comisión de la Verdad que preside Encinas Rodríguez señala que desde enero de 2019, poco después del arranque del gobierno de AMLO, reinició la búsqueda de los 43 normalistas. Fueron 101 búsquedas en seis municipios, Iguala y cinco circundantes.

Como las autoridades municipales, estatales y federales tenían conocimiento de las movilizaciones de normalistas y también supieron que los estaban atacando maleantes y no intervinieron para salvarlos, son culpables por omisión, acusa.

Posteriormente, diversas autoridades en acción concertada contribuyeron a fortalecer lo que exprocurador general de la República; es decir, Murillo Karam, llamó “verdad histórica”, motivo por el cual serían procesados judicialmente.

La Comisión de la Verdad concluye que se trata de un “crimen de Estado”, ya que el grupo delictivo agresor de los normalistas actuó con apoyo de corporaciones policiales de Iguala, Huitzuc y Cocula. El aporte que hace este informe es que hay la presunción de que sacaron a los normalistas de Iguala, ya cautivos, con rumbo al vecino estado de Morelos,





sin que hubiera complicaciones para pasar por varios retenes policiales.

Sin embargo, la conclusión definitiva es que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”. Recomienda la comisión de Encinas Rodríguez proseguir la búsqueda de los restos de los normalistas en los ríos de tres municipios vecinos de Iguala.

El informe se dio a conocer el jueves 18 de agosto y un día después, las autoridades federales informaron la detención de Murillo Karam, aunque no por otro delito que obstruc-

ción de la justicia.

Según comunicado de la hoy Fiscalía General de la República (antes PGR) el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuc; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. “Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada,

desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, dice el comunicado.

De llegarse a cumplir la totalidad de esas órdenes de aprehensión, el mismo titular de la Sedena sería encarcelado, porque el actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, era el encargado de la zona militar de Guerrero cuando se dio la desaparición de los normalistas.

88 compromisos

En campaña, López Obrador aseguró a los familiares de los 43 desaparecidos que, al llegar al gobierno, haría todo lo necesario para encontrarlos. Esa declaración le ganó la simpatía de los normalistas y los grupos sociales afines; en sus protestas, despotricaban contra los “gobernantes corruptos” y los “partidos cómplices de la delincuencia” que eran el PRI el PAN y el PRD. Solo Morena, sus candidatos y dirigentes se salvaban.

Tras ganar la presidencia de la República en 2018, al cumplirse cuatro años de los hechos violentos de Iguala del 26 de septiembre de 2014, se reunió con familiares de los 43 y después, aseguraría que “vamos a conocer lo que realmente sucedió; que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”. También dijo que su compromiso era “no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.

Al cumplir nueve meses en la presidencia de la República, en el quinto aniversario de los hechos violentos de Iguala, López Obrador anunció en Palacio Nacional la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo sería esclarecer el caso Ayotzinapa. Y en septiembre de 2021, tras cumplir su tercer año de gestión, reconoció ante reporteros de la fuente presidencial que el caso Ayotzinapa era uno de los 88 compromisos de campaña que no había cumplido, pero la mayoría sí.





Comunicado

Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022.

El Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario en el Senado de la República, frente a la discusión sobre la reforma constitucional en materia de seguridad pública, manifiestan a la opinión pública:

Su respeto irrestricto al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, a su personal, con el reconocimiento a su entrega y profesionalismo en cumplimiento de las funciones legales que se les han encomendado, incluyendo las labores de apoyo y auxilio a la población ante desastres naturales.

Por lo que hace a la tareas de seguridad pública, en los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado de la República participamos en su momento, de manera propositiva, en la creación de la Guardia Nacional y en la formulación del artículo 5° Transitorio a fin de dar soporte jurídico a la actuación de las fuerzas armadas.

El mencionado artículo, que en su construcción contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, estableció respecto a las tareas de seguridad pública que las Fuerzas Armadas acompañarían a la Guardia Nacional, en tanto esta estuviera conformada, por un plazo de 5 años, que vence en 2024.

Transcurridos tres años y medio después de su creación no es posible señalar que se haya logrado la consolidación de la Guardia Nacional como una policía nacional de carácter civil, como tampoco los resultados en materia de seguridad pública hacen pensable que se deba prorrogar el plazo establecido sin antes hacer un balance sobre lo que ha sucedido hasta la fecha, tomando en cuenta que los índices de violencia e inseguridad han crecido en este lapso.

Parece bastante claro que la estrategia oficial al respecto está fallando, y que la solución no es alargar el plazo para la permanencia de nuestras fuerzas armadas en estas delicadas tareas, sino de diseñar un sistema nacional de seguridad pública de carácter civil, que tome desde ya todas las medidas organizativas y presupuestales para fortalecer a las policías estatales y municipales para su debida capacitación, equipamiento y certificación,

manteniendo a los militares en funciones de auxilio a la población a efecto de proveerla de la urgente y necesaria seguridad pública, en los términos del artículo 5o constitucional vigente.

Por ello, hacemos un llamado al debate serio e informado sobre las diversas tareas y áreas de mejora en torno a las funciones de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, siempre bajo control de autoridades civiles y bajo la vigilancia del Congreso de la Unión.

Y, por lo tanto, en congruencia con lo anterior y desde la perspectiva de un partido de izquierda socialdemócrata como es el PRD, defensor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas, sostenemos que no es necesaria esta reforma al mencionado transitorio constitucional, por lo que el voto de los Senadores perredistas será en contra.

Queremos dejar en claro que es falso que con esta decisión estamos exigiendo el retiro inmediato de las fuerzas armadas a sus cuarteles y, con ello, dejar desprotegida a la sociedad en amplias regiones del país, que hoy mismo padecen de este problema.

El PRD tiene el firme compromiso de sumar esfuerzos con todos aquellos partidos, liderazgos sociales y políticos que contribuyan a robustecer el debate legislativo con propuestas que incidan en lograr la seguridad pública y, por ende, una mejor calidad de vida de las y los mexicanos.

Refrendamos el compromiso con el Estado de Derecho, el sistema democrático y la defensa de los derechos humanos. Y reiteramos nuestra determinación de contribuir activamente en la construcción de una estrategia de seguridad pública de carácter civil, que en situaciones específicas pueda contar con el acompañamiento de nuestras fuerzas armadas y logre disminuir la creciente violencia e inseguridad en el país.

López Obrador nunca propuso en campaña la Guardia Nacional

**El mandatario justificó su cambio de estrategia respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles debido, dijo, a que resultaron la mejor opción de enfrentar los niveles de violencia que existían cuando inició su mandato...*

Rafael Solano

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nunca propuso la creación de la Guardia Nacional durante sus tres campañas; al contrario, criticó el uso de las fuerzas armadas para combatir la inseguridad pública.

Sin embargo, al iniciar el cuarto de sus seis años de gobierno, decide que la Guardia Nacional, que al crearse en mayo de 2019 se planteó sería con mando civil, pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El asunto generó polémica porque, al tiempo que refuerza la militarización de la seguridad pública, polariza al denominado “bloque opositor” a Morena que, de entrada, se opuso a respaldar la iniciativa de López Obrador, pero al final recibió espaldarazo, en la cámara de diputados, del partido *tricolor*. Sin embargo, el asunto se atoró en el Senado.

Desde el año 2007, con el argumento de combatir a la inseguridad, se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles y ahí siguen; pero Ernesto Zedillo Ponce de León militarizó el sur del país en 1994 tras el surgimiento del EZLN en Chiapas y grupos afines en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Vicente Fox ya no tenía amenaza guerrillera, pero surgieron en su periodo de 2000 a 2006 los diversos

grupos delictivos que desataron una guerra por imponerse.

Según una revisión hemerográfica, el despliegue de militares en las calles se dio de lleno cuando Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra contra las drogas”, poco después del arranque de su sexenio. Sin embargo, la militarización de la seguridad no frenó la violencia criminal y la cifra de homicidios anuales se ha mantenido estable, superior a los 36 mil desde el año 2010, cifra que con la Guardia Nacional no ha disminuido.

Aunque en teoría, la Guardia Nacional debería estar integrada por elementos civiles, en la práctica actuaba como un cuerpo bajo control militar. Esto es porque el 80 por ciento de sus 110 mil efectivos distribuidos en 242 cuarteles (llegarían a 500 a fines de 2022) provienen del Ejército y la Marina, la reforma legal para que la Sedena se haga cargo de su manejo reafirma oficialmente su espíritu castrense.

La decisión de apartar este cuerpo policial militarizado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al Ejército y la Fuerza Aérea causó una gran polémica, entre críticas por lo que muchos organismos interpretan como una clara y progresiva militariza-

ción del país.

Entre los señalamientos más frecuentes está el hecho de que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al Ejército mexicano durante las décadas de 1960 y 1970, cuando se dieron hechos como la masacre estudiantil en Tlatelolco y el combate a grupos subversivos en Guerrero y otras entidades, así como el *halconazo* de 1971.

Cambiar de opinión

La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción. Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía que el mando militar se retiraría en 2024, de manera inesperada surgió la propuesta del opositor PRI para extender ese periodo hasta 2028, luego de que López Obrador enviara la iniciativa de ley correspondiente para transferir de mando



civil a mando militar el control de la Guardia Nacional. El bloque opositor a Morena, sin embargo, había anunciado rechazo total.

López Obrador justificó, previo al envío de la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, en donde ya la aprobaron los diputados federales y faltan los senadores, por qué no obligará a que los militares regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente de la República.

López Obrador, sin embargo, negó tales acusaciones. “El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, dijo los primeros días de septiembre.

El mandatario justificó su cambio de estrategia respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles debido, dijo, a que resultaron la mejor opción de enfrentar los niveles de violencia que existían cuando inició su mandato y a que considera que otorgarle un carácter militar ayudará a su buen funcionamiento.

“Sí, sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?”, reconoció. “Nosotros no queremos un Estado autoritario,

hemos luchado siempre en contra de eso, con el único afán de que (la Guardia Nacional) se consolide, que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”.

“Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al Ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante”, dice Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

“La profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años”, alerta en entrevista con la Corporación Británica de Radiodifusión

Por su parte, Amnistía Internacional, tras conocer la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, consideró que “militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos”.

En tanto, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con un comunicado distribuido en todo el mundo, la funcionaria de la ONU

recuerda que el 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.

Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.

“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, concluyó. La Alta Comisionada interina expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad.

La oposición en el Senado durante la votación anunció controversia; la lógica es que la Constitución mexicana contempla que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil

